



## INTELIGENCIA POLÍTICA VS LA EXTORSIÓN

**SALVADOR GUERRERO CHIPRÉS**

La arquitectura de la seguridad pública no puede reducirse al despliegue de dispositivos, ni al perfeccionamiento técnico. Supone una interacción constante entre instituciones, ciudadanía y representación política.

En este triángulo dinámico, el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) de la Ciudad de México encarna una posibilidad que trasciende lo operativo: la de convertir los datos ciudadanos en insumos legislativos.

Esa contribución adquiere relevancia frente a uno de los delitos más extendidos a nivel nacional y en América Latina: la extorsión.

Desde el 2024, en las líneas 089 de denuncia anónima y la Antiextorsión 55 5036 3301 —creada en noviembre pasado por instrucción de la Jefa de Gobierno, Clara Brugada— hemos

atendido más de 23 mil reportes relacionados con extorsiones.

Frente a ese dato, la cultura de la prevención sustentada en cortar la llamada extorsiva y denunciar ha sido fundamental para que el 87 por ciento de los reportes sean solo por tentativas.

Esos datos fueron conocidos por diputadas y diputados federales en una reunión de trabajo en el C5, promovida por la diputada Gabriela Jiménez, vicecoordinadora de Vinculación Parlamentaria del Grupo Parlamentario de Morena, y de la cual participaron legisladores por la Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Veracruz y Zatecas.

Su disposición remite al reconocimiento de una ruta institucional donde el conocimiento de campo, generado por el C5, puede nutrir la capacidad legislativa para anticipar, tipificar y sancionar con mayor eficacia delitos como la extorsión telefónica.

La colaboración legislativa adquiere valor estructural como actores

capaces de traducir la inteligencia institucional en marcos normativos coherentes. La extorsión se combate desde la capacidad para integrar las voces que alertan, los datos que previenen, las experiencias que narran el delito desde adentro.

El C5 no es únicamente el centro más importante de su tipo en México, sino un referente en Latinoamérica. La seguridad no se puede sostener sin la participación de la comunidad, ni la legislación es útil sin proximidad al territorio.

En este sentido, la convergencia política, de prevención cívica y acción institucional de la Presidenta Claudia Sheinbaum y Brugada responde a una necesidad estructural: convertir los datos en decisiones, las denuncias en leyes y los reportes en herramientas de justicia.

La fortaleza del C5 no reside solo en su volumen de datos, sino en su vocación de apertura, donde la seguridad se convierte en una construcción para el bien común.

[@guerrerochipres](https://twitter.com/guerrerochipres)